



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXVII - N° 362

Bogotá, D. C., martes, 5 de junio de 2018

EDICIÓN DE 20 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

ACTAS DE CONCILIACIÓN

ACTA DE CONCILIACIÓN PROYECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2017 SENADO, 272 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C. 21 de mayo de 2018

Doctor
EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA
Presidente
Honorable Senado de la República

Doctor
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes

Ref. Acta de conciliación Proyecto de Ley número No. 261 De 2017 senado, 272 de 2017 Cámara "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL SISTEMA DE RESIDENCIAS MÉDICAS EN COLOMBIA, SU MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

En consideración a la designación efectuada por las Presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes, y según lo contemplado en el artículo 161 constitucional y en los artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5ª de 1992, por su conducto nos permitimos someter a consideración de las respectivas plenarias, el texto conciliado del Proyecto de Ley número No. 261 de 2017 senado, 272 de 2017 Cámara "***Por medio de la cual se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones.***"


PROPOSICIÓN

Honorables Senadores y Honorables Representantes a la Cámara:

La Comisión Accidental de conciliación designada por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, encontramos procedente acoger como texto final, el texto aprobado por el Honorable Senado de la República el día 17 de mayo de 2018, tanto en el título como en su articulado, el cual se adjunta y hace parte integral del presente informe. En consecuencia, respetuosamente solicitamos a las plenarias de ambas Cámaras aprobar el presente informe de Comisión Accidental de conciliación.

Cordialmente,

Por el Honorable Senado de la República:



JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Senador

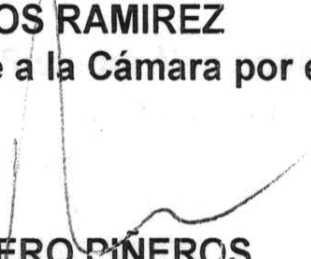


ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Senador

Por la Honorable Cámara de Representantes:



DIDIER BURGOS RAMÍREZ
Representante a la Cámara por el Departamento de Risaralda



RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá

**TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2017
SENADO, 272 DE 2017 CÁMARA**

por medio de la cual se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones.”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Residencias Médicas en Colombia que permita garantizar las condiciones adecuadas para la formación académica y práctica de los profesionales de la medicina que cursan programas académicos de especialización médico quirúrgicas como apoyo al Sistema General de Seguridad Social en Salud, define su mecanismo de financiación y establece medidas de fortalecimiento para los escenarios de práctica del área de la salud.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que se instituyan como escenarios de práctica formativa en salud, a las Instituciones de Educación Superior que cuenten con programas académicos de especialización médico quirúrgicas debidamente autorizados, a los profesionales de la salud que cursen especializaciones médico quirúrgicas y a las autoridades de carácter nacional, departamental, distrital y municipal que actúen dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Artículo 3°. Sistema Nacional de Residencias Médicas. El Sistema Nacional de Residencias Médicas es un conjunto de instituciones, recursos, normas y procedimientos que intervienen en el proceso de formación de los profesionales médicos que cursan un programa de especialización médico quirúrgica y requiera de práctica formativa dentro del marco de la relación docencia - servicio existente entre la Institución de Educación Superior y la institución prestadora de servicio de salud.

Artículo 4°. Residente. Los residentes son médicos, con autorización vigente para ejercer su profesión en Colombia, que cursan especializaciones médico quirúrgicas en programas académicos legalmente aprobados que requieren la realización de prácticas formativas, con dedicación de tiempo completo, en

Instituciones de Prestación de Servicios de Salud, en el marco de una relación docencia servicio y bajo niveles de delegación supervisión y control concertados entre las Instituciones de Educación Superior y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Los residentes podrán ejercer plenamente las competencias propias de la profesión o especialización para las cuales estén previamente autorizados, así como aquellas asociadas a la delegación progresiva de responsabilidades que corresponda a su nivel de formación.

Artículo 5°. Contrato especial para la práctica formativa de residentes.

Dentro del marco de la relación docencia - servicio mediará el contrato de práctica formativa del residente, como una forma especial de contratación cuya finalidad es la formación de médicos especialistas en programas medico quirúrgicos, mediante el cual el residente se obliga a prestar por el tiempo de duración del programa académico, un servicio personal, acorde al plan de delegación progresiva de competencias propias de la especialización, a cambio de lo cual recibe de la institución prestadora de servicios de salud, una remuneración que constituye un apoyo de sostenimiento educativo mensual, así como las condiciones, medios y recursos requeridos para el desarrollo formativo.

El contrato especial para la práctica formativa de residente contemplará las siguientes condiciones mínimas:

- 5.1. Remuneración mensual no inferior a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes a título de apoyo de sostenimiento educativo.
- 5.2. Garantía de las condiciones, medios y recursos requeridos para el desarrollo formativo.
- 5.3. Afiliación a los sistemas de salud y riesgos laborales.
- 5.4. Derecho a receso remunerado por el período que la Institución de Educación Superior contemple para el programa, sin que exceda de 15 días hábiles por año académico. Sin perjuicio de los casos especiales establecidos en norma.
- 5.5. Plan de trabajo o de práctica, propio del programa de formación de acuerdo con las características de los servicios, dentro de los espacios y horarios que la institución prestadora de servicios de salud tenga contemplados.
- 5.6. Cuando en cumplimiento del plan de delegación progresiva de competencias propias de la especialización se exija la rotación en diferentes escenarios de práctica, el apoyo de sostenimiento estará a cargo de la Institución Prestadora de Servicios de Salud que defina la Institución de Educación Superior como escenario base del programa, entendido este como aquella institución prestadora del servicio de salud en la que el residente realiza la mayor parte de la rotaciones definida en el programa académico.

5.7. Se desarrollará bajo la responsabilidad del convenio docente asistencial entre la Institución de Educación Superior y la Institución Prestadora del Servicio de Salud.

Parágrafo 1°. Salvo en los casos de emergencia establecidos en la norma para las instituciones prestadoras de servicio del salud, la dedicación del residente en las Instituciones prestadoras del servicio de salud, públicas y privadas, no podrá superar las 12 horas por turno y las 66 horas por semana, las cuales para todos los efectos deberán incluir las actividades académicas, de prestación de servicios de salud e investigativas.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá establecer incentivos económicos u otros especiales y diferenciales a los residentes que cursen programas de especialización considerados prioritarios para el país.

Artículo 6°. Mecanismo de Financiación del Sistema de Residencias Médicas. El Gobierno Nacional adelantará el mecanismo de financiación de residencias médicas a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Los recursos serán girados directamente a la Institución Prestadora de Servicios de Salud, para la destinación exclusiva del pago el apoyo de sostenimiento a los residentes que cursen uno de los programas de especialización médico quirúrgica, previa verificación de la existencia del contrato y constancia de matrícula al programa de especialización medico quirúrgica.

Parágrafo 1°. Con los recursos del mecanismo de financiamiento establecido el presente artículo, se financiará el sostenimiento del residente por un monto de tres salarios mínimos legales mensuales, por un plazo máximo que será la duración del programa de especialización médico quirúrgica, según la información reportada oficialmente por las instituciones de educación superior al Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo 2°. En ningún caso se otorgará apoyo de sostenimiento, con los recursos del mecanismo de financiamiento creado mediante el presente artículo, para más de un programa de especialización médico quirúrgica a un mismo profesional, así como tampoco para residente de programas que definan como requisito de admisión la obtención previa de un título de especialización médico quirúrgico.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentara las condiciones de afiliación y cotización de los residentes al sistema general de seguridad social integral.

Parágrafo 4°. El desconocimiento de la destinación específica de los recursos para la financiación del sostenimiento del residente dará lugar a sanción impuesta por la Superintendencia de Salud en los términos de la ley 1438 de 2011.

Artículo 7°. Agregase un literal N, al aparte “Estos Recursos se destinarán a” del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, así:

N) Al pago del apoyo de sostenimiento a residentes, según la normatividad que lo establece.

Artículo 8°. Fuentes de Financiación del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Podrán ser fuentes de financiación para el Sistema de Residencias Médicas, las siguientes:

1. Los recursos destinados actualmente para financiar la beca-crédito establecida en el parágrafo 1° del artículo 193 de la Ley 100 de 1993.
2. Hasta un cero punto cinco por ciento (0.5%) de los recursos de la cotización recaudados para el régimen contributivo de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dependiendo de las necesidades lo cual se definirá en el Presupuesto General de la Nación de cada año.
3. Los excedentes del FOSFEC, descontado el pago de pasivos de las cajas de compensación que hayan administrado o administren programas de salud o participen en el aseguramiento en salud.
4. Los recursos que del presupuesto general de la nación se definan para dicho propósito.

Parágrafo 1°. Los actuales beneficiarios del fondo de becas-crédito establecido en el parágrafo 1° del artículo 193 de la Ley 100 de 1993 serán reconocidos como beneficiarios de la presente ley. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá el mecanismo de traslado.

Parágrafo 2°. Los saldos y remanentes que existan al momento de terminación del Convenio MinSalud - Icetex (Ley 100/93) y todos aquellos que resulten del proceso de liquidación del mismo, constituirán fuente de financiación del Sistema Nacional de Residencias Médicas, y se utilizarán según el mecanismo que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.

Artículo 9°. Reporte de residentes ante el Sistema de Información del Registro Único Nacional de Talento Humano. El Residente deberá inscribirse como tal en el Sistema de Información del Registro Único Nacional de Talento Humano, de acuerdo con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 1°. Toda novedad del Residente deberá ser notificada por la Institución de Educación Superior, y registrada en el Sistema de Información del Registro Único Nacional de Talento Humano.

Artículo 10. Las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud establecidas como escenarios de práctica que vinculen a residentes, deberán llevar un registro detallado de los servicios prestados por el residente en el marco del convenio docencia - servicio e indicar el valor de los mismos a la Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud respectiva.

Artículo 11. De la terminación y suspensión de las actividades de residente. La terminación o suspensión de las actividades como residente dependerán de las

condiciones académicas del estudiante en formación, y no se entenderá suspendido ni terminado el contrato de práctica formativa para residencia médica cuando por consideraciones académicas o del plan de prácticas, el residente deba hacer rotaciones en diferentes centros de práctica.

Artículo 12. Matrículas de las especializaciones médicas en Colombia. El valor de la matrícula de los programas de especialización médico quirúrgica no podrá exceder el total de los costos administrativos y operativos en que incurra para su desarrollo la Institución de Educación Superior. Los costos reportados deben ser verificables y demostrables.

Parágrafo 1°. Las instituciones prestadoras del servicio de salud (IPS) y empresas sociales del estado (ESE), no podrán cobrar en dinero a las Instituciones de Educación Superior, por permitir el desarrollo de la residencia.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional y la Superintendencia Nacional de Salud vigilarán el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente artículo, según sus competencias.

Parágrafo 3°. La Asociación Nacional de Internos y Residentes, así como la Federación Médica Colombiana, podrán realizar acciones de veeduría sobre los procesos de vigilancia que establece el presente artículo.

Artículo 13: Aplicabilidad: Las disposiciones contenidas en el artículo quinto de la presente ley se implementarán de manera progresiva, según los términos y lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social, en todo caso no podrá superar de tres (3) años su aplicación integral.

Artículo 14. Reglamentación. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará las disposiciones establecidas en la presente ley, en un plazo no mayor de un (1) año a partir de su expedición.

Artículo 15. De la disponibilidad de médicos especialistas. El ministerio de Salud y Protección social adelantará un adecuado diagnóstico de las necesidades e personal médico especializado en el marco del modelo de atención en salud de Colombia.

El diagnóstico será el insumo para el desarrollo de una política pública nacional que fomente la formación de médicos especialistas, teniendo en cuenta el desarrollo de incentivos a institución de Educación Superior y a los profesionales médicos en formación.

Artículo 16. Vigencia y derogatorias. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

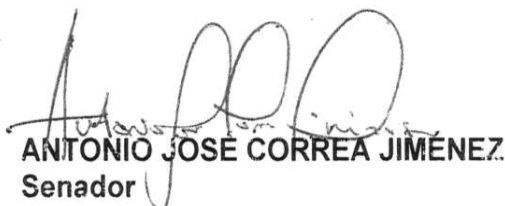
Deróguense expresamente los incisos 1 y 2 del artículo 14 de la Ley 1797 de 2016.

Cordialmente,

Por el Honorable Senado de la República:

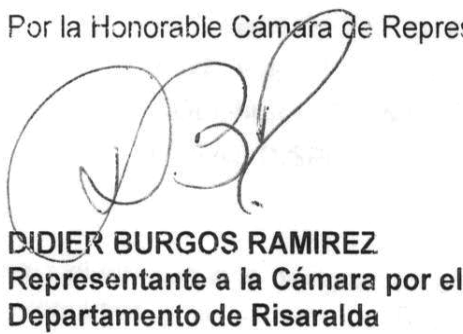


JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Senador



ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Senador

Por la Honorable Cámara de Representantes:



DIDIER BURGOS RAMIREZ
Representante a la Cámara por el
Departamento de Risaralda



RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Representante a la Cámara por el
Departamento de Boyacá

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 216 DE 2018 SENADO, 271 DE 2017 CÁMARA

por el cual se eliminan las practicas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D, C. Mayo de 2018.

Doctor

JESUS MARIA ESPAÑA

Secretario General Comisión VII

Senado de la República

Ciudad

Ref.: Informe de ponencia para primer debate al **PROYECTO DE LEY 216 DE 2018 SENADO, 271 DE 2017** Cámara “Por el cual se eliminan las practicas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”

Señor secretario:

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992 y respondiendo a la designación hecha por la Mesa Directiva como ponente coordinador de esta iniciativa, me permito rendir informe de ponencia para primer debate del **PROYECTO DE LEY 216 DE 2018 SENADO, 271 DE 2017** Cámara “Por el cual se eliminan las practicas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”

La presente ponencia se desarrollará de la siguiente manera:

1. Antecedentes.
2. Objeto y Justificación del proyecto.
3. Contenido de la iniciativa
4. Pliego de modificaciones
5. Proposición.

1. ANTECEDENTES

El proyecto de ley objeto de estudio, es de iniciativa Ministerial, presentado por Ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos y el H.S. Guillermo García Realpe, tal como consta en Gaceta 382 de 2017 fecha 23 de mayo de 2017.

En continuidad del trámite legislativo, el proyecto de ley número 216 de 2018 Senado, fue remitido a la Comisión Séptima Constitucional Permanente, siendo

designados como ponentes para primer debate los Honorables Representantes Oscar de Jesús Hurtado Pérez, Mauricio Salazar Peláez, Guillermina Bravo Montaña, Rafael Eduardo Palau Salazar.

Presentada ponencia positiva por los H. Representantes ponentes esta Célula Congresional, aprobó el texto propuesto tal como consta en Acta número 33 de Martes 30 de Mayo de 2017.

Posteriormente, publicada ponencia positiva para segundo tal como consta en Gaceta 770 de 2017, fue aprobada la iniciativa por la plenaria de la Honorable Cámara de Representantes el día 21 de Marzo de 2018 – acta N° 276.

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto de ley tiene por objeto terminar la incertidumbre legal que existe respecto a lo establecido por la Corte Constitucional, donde ha reconocido la potestad del Legislativo para determinar en contrario respecto de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 y la Ley 916 de 2004, bien para prohibir la práctica de actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas para limitarlas o para eliminarlas, para lo cual le da al legislador un término de dos años.

FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES.

CORTE CONSTITUCIONAL

En Sentencia C-666-10 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) la Corte se pronunció sobre el particular, en los siguientes términos:

La inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana. Acentúa la Corte que esta consideración supera el enfoque eminentemente utilitarista ¿que los considera en cuanto recurso utilizable por los seres humanos, y se inserta en la visión de los animales como otros seres vivos que comparten el contexto en que se desarrolla la vida humana, siendo determinantes en el concepto de naturaleza y, por consiguiente, convirtiéndose en destinatarios de la visión empática de los seres humanos por el contexto o ambiente en el que desarrolla su existencia. No otra puede ser la norma constitucional que se derive de las diversas y numerosas disposiciones en que la Constitución hace referencia a los elementos que integran el ambiente y que fueron mencionadas anteriormente como parte de la llamada Constitución ecológica.

En relación con su protección, la manifestación concreta de esta posición se hace a partir de dos perspectivas: la de fauna protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies; y la de fauna a la cual se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, protección esta última que refleja un contenido de moral política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres sintientes.

En este sentido resalta la Corte que el concepto protegido como parte del ambiente es la fauna, siendo esta `el conjunto de animales de un país o región¿; la protección

que se deriva de la Constitución supera la anacrónica visión de los animales como cosas animadas, para reconocer la importancia que estos tienen dentro del entorno en que habitan las personas, no simplemente como fuentes de recursos útiles al hombre, sino en cuanto seres sintientes que forman parte del contexto en que se desarrolla la vida de los principales sujetos del ordenamiento jurídico: los seres humanos.

En relación con la obligación constitucional que tiene el constituyente derivado, de legislar y propender por el bienestar y la protección animal expresó la Corte:

En otras palabras, el concepto de dignidad de las personas tiene directa y principal relación con el ambiente en que se desarrolla su existencia, y de este hacen parte los animales. De manera que las relaciones entre personas y animales no simplemente están reguladas como un deber de protección a los recursos naturales, sino que resultan concreción y desarrollo de un concepto fundacional del ordenamiento constitucional, por lo que la libertad de configuración que tiene el legislador debe desarrollarse con base en fundamentos de dignidad humana en todas aquellas ocasiones en que decide sobre las relaciones entre seres humanos y animales; así mismo, en su juicio el juez de la constitucionalidad se debe edificar la racionalidad de su decisión sobre argumentos que tomen en cuenta el concepto de dignidad inmanente y transversal a este tipo de relaciones.

Es esta la raíz de la protección que la Constitución de 1991 incorpora respecto de los animales.

La consecuencia que se deriva de ello consiste, además de la garantía en el contenido constitucional que el mismo implica, en la restricción a la libertad de configuración del legislador respecto del sistema que prevea la protección de los animales, ya sean estos salvajes o domésticos, se encuentren en vía de extinción o no, trátense de especies protegidas o no, ayuden a mantener el equilibrio de ecosistemas o no, provean recursos materiales a la especie humana o no. En efecto, al ser previsto por parte del constituyente una protección de rango constitucional para el ambiente, se encuentra un fundamento de rango y fuerza constitucional en el sistema de protección que para los animales, que en cuanto fauna están incluidos dentro de dicho concepto; en este sentido, se reitera, debe tomarse en cuenta la existencia de parámetros de obligatorio seguimiento para el legislador, que ya no tendrá plena libertad de opción respecto del tipo, el alcance, la amplitud o la naturaleza de la protección que cree respecto de los animales, sino que, en cuanto poder constituido, se encuentra vinculado por el deber constitucional previsto en los artículos 8°, 79 y 95 numeral 8 y el concepto de dignidad humana (entendida en ese contexto como el fundamento de las relaciones que un ser sintiente ¿humano¿ tiene con otro ser sintiente ¿animal¿) consagrado en el artículo 1° de la Constitución, debiendo establecer un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales en cuanto seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el que hombres y mujeres desarrollan su vida.

Respecto a la protección del medio ambiente y la existencia de una Constitución Ecológica, la Corte Constitucional se ha manifestado a favor de dicho precepto en las **Sentencias T-411 de 1992, C-058 de 1994, C-375 de 1994, C-495 de 1996, C-142 de 1997, C-126 de 1998, C-596 de 1998, C-794 del 2000, C-245 del 2004, C-150 del 2005 y C-189 del 2006.**

Inclusive, a nivel del derecho a la propiedad privada, la Corte estableció un derrotero a seguir entre el desarrollo económico, el bienestar individual y la

conservación del ecosistema, todo en aras de armonizar la protección especialísima hacia el bienestar de los animales, especialmente en la **Sentencia T-760 del 25 de septiembre del 2007**.

*Lógicamente la protección medioambiental, como valor constitucional, no tiene un efecto desvanecedor sobre los demás derechos y garantías previstos en la Carta. No obstante, la importancia de tal derecho, de acuerdo a cada caso se hará necesario equilibrarlo con las demás atribuciones individuales, sociales, económicas y colectivas. Par al efecto, **el propio texto constitucional proporciona conceptos relevantes que concretan el equilibrio que debe existir entre el desarrollo económico, el bienestar individual y la conservación del ecosistema**. El desarrollo sostenible, por ejemplo, constituye un referente a partir del cual la jurisprudencia de la Corte ha fijado cuáles son los parámetros que rigen la armonización de tales valores, destacando que: ¿es evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que permita progresivamente mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y biológica de nuestro ecosistema.*

(c)

*Nótese que, a pesar de los profundos cambios normativos relativos al manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, las figuras jurídicas que por excelencia rigen el disfrute de las especies animales son la cacería y el zoo cría (Ley 84 de 1989, Ley 611 de 2000 y Decreto número 4688 de 2005). **No obstante, es necesario insistir, la caza indiscriminada de animales, entendida como el acceso libre o arbitrario del hombre sobre cualquier recurso faunístico de la naturaleza no tiene soporte legal o constitucional actual**. Esta, en sus diferentes especialidades, tiene que cumplir con varias condiciones generales para que se considere legítima: (i) la obtención de la autorización, permiso o licencia que define las circunstancias bajo las que se podrá acceder al recurso faunístico, precedida por la determinación de las especies y los cupos globales de aprovechamiento; (ii) garantizar que las condiciones bajo las que se manejarán los animales permiten el bienestar de cada especie y el desarrollo sostenible del recurso; y **(iii) evitar que el aprovechamiento del animal comporte actos de crueldad que perjudiquen el bienestar de este** o que su permanencia contraríe la tranquilidad de otras personas. (Resaltado fuera del texto).*

CONSEJO DE ESTADO.

En Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Enrique Gil Botero, con fecha del 23 de mayo de 2012, el Alto Tribunal de lo contencioso administrativo determina, entre otros aspectos, que:

Los animales, al igual que las personas, tienen una serie de derechos en los cuales se encuentran incluidos el de una muerte digna y sin sufrimiento.

Existe una grave falla en el Código Civil en el cual se trata a los animales como simples objetos, señalando así que estos tienen un propósito vital en la vida y en su relación directa con el ser humano, hecho por el cual no pueden ser maltratados.

No es lícito que los torturemos o que su muerte se convierta en un espectáculo.

Los dueños de los animales, ya sean domésticos o fieros, tienen que velar por un trato digno y respetuoso.

Existen normas internacionales que protegen a los animales, en las cuales se indica que tienen derechos igual a las personas, hecho por el cual los órganos estatales deben velar por su cuidado y protección.

Se debe reconocer el valor de los animales como seres vivos y su capacidad para ser titulares de derechos, sin que se les pueda imputar responsabilidad directa por su comportamiento, sino a través de sus propietarios o quienes ostentan su guarda material.

El pronunciamiento se dio por una demanda instaurada en contra del municipio de Anserma, Caldas, por parte de los familiares de un vaquero que murió a causa de la cornada de una novilla que iba a ser sacrificada en el matadero municipal. Por estos hechos los demandantes señalaban que la responsabilidad de esta muerte era del municipio caldense, puesto que las novillas eran de su propiedad por lo que tenían que responder económicamente por los daños y perjuicios. Sin embargo, la Sala determinó que en este caso la responsabilidad no recaía sobre el animal, sino que, por el contrario, recaía sobre sus propietarios puesto que el vaquero conocía de los riesgos de su actividad.

Ahora bien, en el fallo 22592 de 2012 del Consejo de Estado, se complementa el reconocimiento realizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 666 de 2010 en el sentido de la capacidad de sentir dolor y placer que tienen los animales. En principio, la decisión del honorable Consejo de Estado dejaría sin efectos algunos artículos del Código Civil (artículos 2353 y 2354) que equipara a los animales a cosas, en tanto logra complementar, en buena medida, a nivel de jurisprudencia, la Sentencia C-666 de 2010, que limitó de manera considerable el ejercicio de la tauromaquia en Colombia, reconociéndola como un acto cruel que debe ir desapareciendo con el tiempo, a la par que resalta una serie de medidas que llevan a proteger a los animales partícipes de esta actividad. Lo anterior, va en dirección del espíritu consagrado en los anales de la Ley 84 de 1989 Estatuto Nacional de Protección a los Animales que, a pesar de sus expresas y controversiales excepciones, en las cuales se incluye la tauromaquia, sí pone de manifiesto la necesidad de una evolución moral, de modo que logre abarcar y no discrimine a ninguna especie animal.

También vale la pena traer a colación la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca del 12 de julio de 2012, con radicado número 110013331032-2007-00288-01, mediante la cual se ordenó *¿al Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del presente fallo, dé por terminado el Contrato 411 de 1999 con sus prórrogas, suscrito con la Corporación Taurina de Bogotá, en el evento de que el mismo siga vigente.*

De acuerdo con esas directrices, el Gobierno nacional construyendo una estrategia para educar para la paz, debe crear escenarios que promuevan el respeto a la vida e integridad de los seres vivos, así como eliminar del ordenamiento jurídico toda práctica violenta e inhumana que fomente el desprecio hacia seres sintientes y la insolidaridad entre los ciudadanos, acostumbrados a permanecer impasibles ante el linchamiento de un ser vivo.

DERECHO COMPARADO

A. ESPAÑA (Islas Baleares)

LEY 9/2017, DE 3 DE AGOSTO, DE REGULACIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS Y DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN LAS ILLES BALEARS

El texto prohíbe a partir de su entrada en vigor la muerte del animal en la plaza, así como el daño físico y psíquico, que serán sancionables con multas de hasta 100.000 euros. Se establecen el capote y la muleta como únicos utensilios a utilizar por los profesionales taurinos, vetándose expresamente el uso de banderillas, rejones, puyas, estoques o espadas, entre otros. A partir de ahora, en cada corrida podrán participar un total de tres astados y su intervención será de un máximo de diez minutos. Una vez transcurrido ese tiempo serán conducidos y retornados a los corrales, según establece el texto.

Con la nueva normativa, las corridas solo se podrán celebrar en las plazas de toros permanentes y con ganado que cuente con un mínimo de cuatro años. Los astados tendrán que ser reconocidos previamente por el servicio veterinario y por el Presidente de la plaza, que se encargarán de constatar el bienestar físico y psíquico del animal. Tanto los astados como los toreros serán sometidos a controles antidopaje antes de participar en la corrida, mientras que los primeros tendrán que pasar un nuevo examen al finalizar el espectáculo para comprobar su estado sanitario. Los toros serán devueltos a la empresa ganadera que los haya proporcionado después de la inspección veterinaria, reza el texto.

Baleares también eleva la edad de acceso a las plazas de los 16 años actuales a los 18 y prohíbe la venta y el consumo de alcohol en el recinto, en el que la cartelería tendrá que advertir de que el festejo puede herir la sensibilidad del espectador. Tampoco estará permitido el toreo con caballos, el rejoneo, que queda excluido de los espectáculos taurinos en las islas. Otro de los puntos novedosos de la normativa es que no estarán permitidos los circos con animales salvajes ni los nuevos festejos populares que los incluyan.

B. PROHIBICIÓN DE CORRIDAS DE TOROS EN ECUADOR

A través de consulta popular, el Presidente Rafael Correa en el año 2011 con la pregunta Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal. Como resultado en 111 cantones quedaron prohibidas por su votación y en los demás cantones que no quedaron prohibidas, se debe garantizar la vida del animal. De momento, en Ecuador, solo en Quito, se prohibieron las corridas de toros.

3. AUDIENCIA PÚBLICA COMISIÓN SÉPTIMA DE SENADO.

Con el ánimo de enriquecer el debate y fortalecer la participación ciudadana en medio del proceso legislativo, en la Comisión Séptima Constitucional Permanente de Senado se realizó audiencia pública el día 16 de mayo de 2018, con el fin de conocer y recopilar la posición de diferentes actores sociales frente al objeto de la iniciativa. De esta manera, intervinieron Agremiaciones defensoras de animales nacionales e internacionales, Corporaciones y Agremiaciones Taurinas representativas de las regiones del país, Empresarios ganaderos, Universidades y

Catedráticos que desarrollan investigaciones respecto a dichas prácticas entre otros.

Se esbozaron argumentos de apoyo dentro de los cuales enunciamos como principales:

1. La necesidad de adaptar las disposiciones legislativas a los avances de la jurisprudencia constitucional en materia de protección de animales, en especial en los efectos diferidos a dos años de la sentencia C- 041 de 2017, que elimina las excepciones con relación a las prácticas culturales que permiten circunstancias de maltrato, crueldad y violencia animal en su práctica.
2. Los derechos culturales no pueden implicar desconocimiento del derecho a un ambiente sano, siendo necesario estudiar este derecho desde lo complejo. En palabras del interviniente el ambiente sano no se compone solamente por el aspecto biofísico de las lesiones y perjuicios que sufren los animales del espectáculo, sino que el ambiente incluye factores culturales, sociales, económicos y jurídicos, lo cual configura un análisis desde lo complejo, que para el caso jurídico implica, entre otras cosas, el entendimiento de los derechos colectivos como marco de referencia de aplicación del artículo 79 Constitucional.

Tampoco puede considerarse las tradiciones culturales como identidades inmodificables, ya que como expresión del ser humano se deben adaptarse a la evolución y aceptación de nuevos valores sociales.

Además de ello, en dicha audiencia se reconoció, la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de quienes desarrollan este tipo de actividad, dado que con ocasión a la implementación de la disposición pueden verse afectados, frente a la restricción del ejercicio de profesión autónoma y libre, derecho al trabajo, derechos culturales entre otros.

4. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

- Eliminación de las prácticas taurinas como una expresión de violencia y crueldad en espectáculos públicos, la cual se extiende a las prácticas culturales de rejoneo, corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas.
- Derogación del reglamento taurino.
- Desarrollo de un plan general articulado por el Ministerio del Interior, para la eliminación de las prácticas taurinas, en donde se garanticen la continuidad de los derechos laborales de quienes se encuentran vinculados a estas actividades; así como la protección de derechos culturales y económicos de las poblaciones en donde la eliminación tenga incidencia mediante la creación de nuevas prácticas.
- Establece la aplicación progresiva de esta eliminación con garantía de participación ciudadana en aquellas poblaciones donde estas prácticas sean una manifestación de tradición regular, periódica e ininterrumpida.

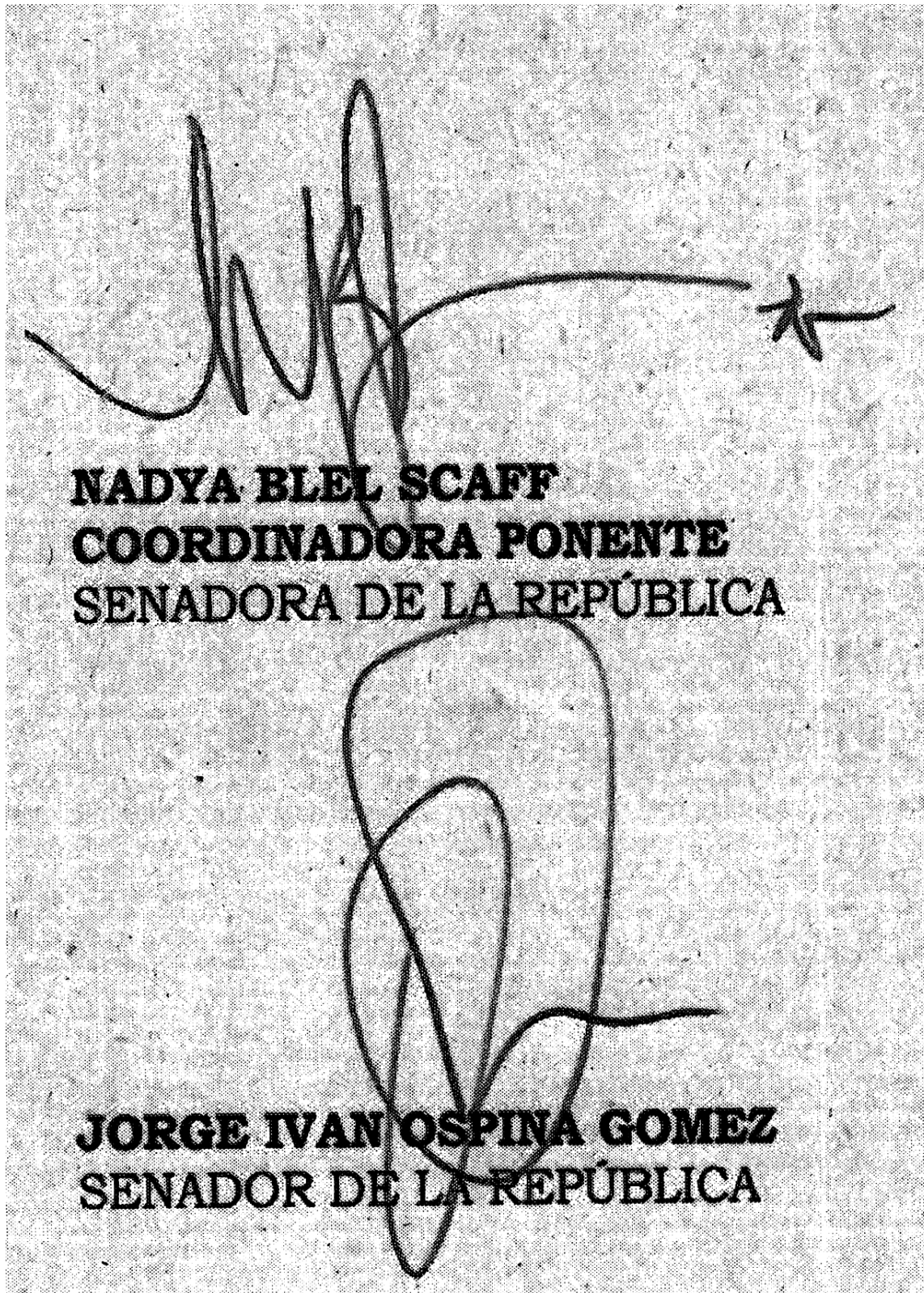
5. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO APROBADO EN SEGUNDO DEBATE CAMARA	TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE SENADO.
<p>Artículo 2º. Elimínense las expresiones rejoneo, corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas contenidas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989.</p>	<p>Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a las prácticas culturales de rejoneo, corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas.</p>
<p>Artículo 4º. Las entidades territoriales con el apoyo del Gobierno nacional tendrán un plazo de seis (6) meses a partir de la expedición de la presente ley, para presentar un plan de atención y una propuesta con nuevas actividades económicas y culturales, si se requiere, para que las personas que se dedican a la actividad taurina cuenten con programas de sustitución e integración laboral.</p>	<p>Artículo 4º. Plan General Para La Eliminación De Las Prácticas Taurinas En El Territorio Nacional. El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, en apoyo con los Ministerios de Trabajo; Industria, Comercio y Turismo; Cultura y Ambiente, en el marco de sus competencias; tendrá un plazo de seis (6) meses a partir de la expedición de la presente ley, para articular el Plan General Para La Eliminación De Las Prácticas Taurinas en el Territorio Nacional, el cual contendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Medidas de adaptación laboral, y reconversión productiva que garantice a las personas que se dediquen a las actividades económicas relacionadas con las prácticas taurinas la continuidad del derecho al trabajo. b. La promoción de nuevas actividades económicas y culturales en las regiones. c. La creación de espacios con sentido cultural, ambiental y reconocimiento de las condiciones de bienestar animal, dirigidos al aprovechamiento y conservación de las especies genéticamente modificadas con ocasión a las prácticas taurinas. <p>Parágrafo 1. El SENA promoverá y desarrollará en el marco de sus competencias la realización de programas de formación, capacitación, fortalecimiento empresarial de actividades diferentes a las taurinas, dirigidas a las regiones en donde la eliminación genere impacto económico.</p> <p>Parágrafo 2. En el marco del Plan General, la eliminación de las prácticas taurinas tendrá aplicación diferencial y progresiva en aquellas entidades territoriales en donde sea una manifestación de tradición regular, periódica e ininterrumpida y su prohibición genere impacto económico en la población, para ello se garantizara el principio de participación ciudadana.</p>

6. PROPOSICIÓN.

Por las anteriores consideraciones y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Ponencia Positiva y solicitar a la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de Senado dar primer debate al **PROYECTO DE LEY 216 DE 2018 SENADO, 271 DE 2017** Cámara “Por el cual se eliminan las practicas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”

A vuestra consideración, los ponentes:



**TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 216 DE 2018 SENADO - 271 DE 2017 CÁMARA.**

Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. La presente ley tiene como objetivo fortalecer la cultura ciudadana para la paz, respeto a la vida e integridad de los seres sintientes, eliminando las prácticas taurinas como una expresión de violencia y crueldad en espectáculos públicos.

Artículo 2º. *Ámbito de aplicación.* Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a las prácticas culturales de rejoneo, corridas de toros, novilladas, becerradas y tientas.

Artículo 3º. Deróguese la Ley 916 de 2004 Reglamento Nacional Taurino.

Artículo 4º. *Plan General Para La Eliminación De Las Prácticas Taurinas En El Territorio Nacional.* El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, en apoyo con los Ministerios de Trabajo; Industria, Comercio y Turismo; Cultura y Ambiente, en el marco de sus competencias; tendrá un plazo de seis (6) meses a partir de la expedición de la presente ley, para articular el Plan General Para La Eliminación De Las Prácticas Taurinas en el Territorio Nacional, el cual contendrá:

a. Medidas de adaptación laboral, y reconversión productiva que garantice a las personas que se dediquen a las actividades económicas relacionadas con las prácticas taurinas la continuidad del derecho al trabajo.

b. La promoción de nuevas actividades económicas y culturales en las regiones.

c. La creación de espacios con sentido cultural, ambiental y reconocimiento de las condiciones de bienestar animal, dirigidos al aprovechamiento y conservación de las especies genéticamente modificadas con ocasión a las prácticas taurinas.

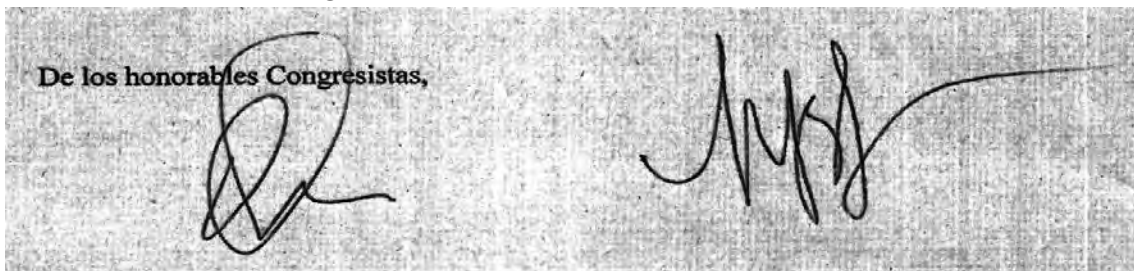
Parágrafo 1. El SENA promoverá y desarrollará en el marco de sus competencias la realización de programas de formación, capacitación, fortalecimiento empresarial de actividades diferentes a las taurinas, dirigidas a las regiones en donde la eliminación genere impacto económico.

Parágrafo 2. En el marco del Plan General, la eliminación de las prácticas taurinas tendrá aplicación diferencial y progresiva en aquellas entidades territoriales en donde sea una manifestación de tradición regular, periódica e

ininterrumpida y su prohibición genere impacto económico en la población, para ello se garantizara el principio de participación ciudadana.

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congressistas,




LA COMISION SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA. - Bogotá D.C., a los treinta uno (31) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018) - En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, el siguiente Informe de Ponencia para Primer Debate y Texto Propuesto para Primer Debate.

NÚMERO DEL PRYECTO DE LEY: N° 216/2018 SENADO Y 271/2017 CÁMARA.

TÍTULO DEL PROYECTO: "POR EL CUAL SE ELIMINAN LAS PRÁCTICAS TAURINAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,



JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
SECRETARIO GENERAL
Comisión Séptima del H. Senado de la República

CONTENIDO

Gaceta número 362 - Martes 5 de junio de 2018
SENADO DE LA REPÚBLICA
ACTAS DE CONCILIACIÓN

	Págs.
Acta de conciliación Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, por medio de la cual se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones	1
PONENCIAS	
Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 216 de 2018 Senado, 271 de 2017 Cámara, por el cual se eliminan las practicas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones	1

